
Sesión: VIGÉSIMA SEXTA ORDINARIA

Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

Hora: 12:00 horas.

Lugar: Ciudad de México
Reforma 211-213, Sala A

ACTA DE SESIÓN

INTEGRANTES

1. **Lcda. Tanya Marlenne Magallanes López.**
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y Presidenta del Comité de Transparencia.
En términos de lo dispuesto en el Acuerdo A/072/2016 por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República y se conforma el Comité de Transparencia, en concordancia con el artículo 64 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF, 9.V.2016)
2. **Lic. José Ricardo Beltrán Baños.**
Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, responsable del área coordinadora de archivos en la Dependencia.
En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción VII y 66, fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en consonancia con el artículo 64 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. **Lic. Luis Grijalva Torrero.**
Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República.
En términos de lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; y 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en consonancia con el artículo 64 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF, 9.V.2016)

ORDEN DEL DÍA

- I. Aprobación del Orden del Día.**
- II. Lectura y aprobación de Acta de la Sesión inmediata anterior.**
- III. Análisis y resolución de las solicitudes de información.**
 - A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la reserva y/o confidencialidad:**
 - A.1. Folio 0001700287216
 - A.2. Folio 0001700287316
 - A.3. Folio 0001700292016
 - A.4. Folio 0001700303816
 - A.5. Folio 0001700304616
 - A.6. Folio 0001700305316
 - A.7. Folio 0001700310416
 - B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de los documentos requeridos:**
 - B.1. Folio 0001700286716
 - B.2. Folio 0001700292616
 - B.3. Folio 0001700303916
 - B.4. Folio 0001700304016
 - B.5. Folio 0001700310616
 - B.6. Folio 0001700316816
 - C. Respuestas a solicitudes de información en las que se analiza la incompetencia de la Procuraduría General de la República respecto de los datos requeridos:**
 - C.1. Folio 0001700303516
 - C.2. Folio 0001700309616
 - C.3. Folio 0001700309716
 - C.4. Folio 0001700310116
 - C.5. Folio 0001700315016
 - C.6. Folio 0001700315116
 - D. Solicitudes de acceso a la información en las que se determina la ampliación de término:**
 - D.1. Folio 0001700283316
 - D.2. Folio 0001700299516
 - D.3. Folio 0001700303616
 - D.4. Folio 0001700304716
 - D.5. Folio 0001700304816



- D.6. Folio 0001700306516
- D.7. Folio 0001700306816
- D.8. Folio 0001700307216
- D.9. Folio 0001700307516
- D.10. Folio 0001700308016
- D.11. Folio 0001700308216
- D.12. Folio 0001700308316
- D.13. Folio 0001700308616
- D.14. Folio 0001700309016
- D.15. Folio 0001700309216
- D.16. Folio 0001700309416
- D.17. Folio 0001700310216
- D.18. Folio 0001700310316
- D.19. Folio 0001700310516
- D.20. Folio 0001700310816
- D.21. Folio 0001700311016
- D.22. Folio 0001700311116
- D.23. Folio 1700500001316

E. Respuestas a solicitudes de información en las que se analizan los cumplimientos a las resoluciones del INAI.

- E.1. Folio 0001700188716 — RRA 242416
- E.2. Folio 0001700222016 — RRA 291316

F. Procedimiento de acceso a la información en la AIC.

G. Asuntos Generales.

- G.1. Solicitudes de acceso a la información relacionadas con carpetas de investigación.



ABREVIATURAS

PGR – Procuraduría General de la República.

OP – Oficina del C. Procurador General de la República.

SJAI – Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

SCRPPA – Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

SEIDO – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

SEIDF – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

SDHPDSC – Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

AIC – Agencia de Investigación Criminal.

OM – Oficialía Mayor.

CAIA – Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

CGSP – Coordinación General de Servicios Periciales.

COPLADII – Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.

CENAPI – Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

PFM – Policía Federal Ministerial.

FEADLE – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

FEPADE – Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales.

FEVIMTRA – Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

UEAF – Unidad Especializada en Análisis Financiero.

UTAG – Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental.

DGCS – Dirección General de Comunicación Social.

DGALEYN – Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.

VG – Visitaduría General.

INAI – Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

LFTAIP – Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

CFPP – Código Federal de Procedimientos Penales

CNPP – Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo A/238/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Septiembre de 2012, así como las contempladas en otras normativas aplicables.

ACUERDOS

- I. Aprobación del Orden del Día.
- II. Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior.
- III. Análisis y resolución de las Solicitudes de Información para su Análisis y Determinación:
 - A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la reserva y/o confidencialidad:

A.1. Folio 0001700287216

Contenido de la Solicitud: *"solicito los dictámenes periciales que se hayan elaborado hasta esta fecha por peritos de la procuraduría general de la república, con relacion a averiguaciones previas iniciadas por delitos en materia de secretos industriales (fracciones iv, v y vi del articulo 223 de la ley de la propiedad industrial) y cuyos asuntos se encuentren concluidos."* (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: AIC y SEIDF.

PGR/CT/ACDO/117/2016: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva invocada por la SEIDF, respecto a los documentos solicitados, en virtud de que se encuentran inmersos en el expediente de averiguación previa, lo anterior con fundamento en el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, en relación con el 16 del CFPP, por un periodo de 5 años, por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

I. Riesgo real, demostrable e identificable, en virtud que con la entrega de la documentación solicitada se hace pública la información que se recopila en un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite; es decir las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación para la acreditación del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

En concordancia con lo anterior, proporcionar la averiguación previa en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por esta autoridad competente, o bien provocar la alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación o poner en riesgo la seguridad o incluso la vida de cualquier persona que se encuentre inmersa en la misma.

II. Perjuicio que supera el interés público, toda vez que, de hacerse públicas las investigaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación, la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, contenidas en la documentación

solicitada, se estaría afectando el interés general que protege esta Institución, consistente en la procuración de justicia a favor de la sociedad, en atención de un interés particular.

Es decir, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que la información en comento atiende a la protección del interés jurídico superior de la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría General de la República radica en implementar acciones para prevenir, perseguir y sancionar los delitos.

III. Principio de proporcionalidad, en virtud, de que no es posible proporcionar la información solicitada, ya que al hacerse públicos los elementos que el Ministerio Público Federal pondría a consideración del Juez para determinar la probable responsabilidad o no del indiciado, podrían alterarse los medios de prueba recopilados, tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado Democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información requerida por el particular vulnera el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés general. En ese sentido, tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad en su totalidad, se debe cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos.

[illegible]

2/11/55

A.2. Folio 0001700287316

Contenido de la Solicitud: *"solicito los dictámenes periciales que se hayan elaborado hasta esta fecha por peritos de la procuraduría general de la república, en materia de secretos industriales (fracciones iv, v y vi del artículo 223 de la ley de la propiedad industrial) y cuyos asuntos se encuentren concluidos."* (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: AIC y SEIDF.

PGR/CT/ACDO/118/2016: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva invocada por la SEIDF, respecto a los documentos solicitados, en virtud de que se encuentran inmersos en el expediente de averiguación previa, lo anterior con fundamento en el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, en relación con el 16 del CFPP, por un periodo de 5 años, por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

I. Riesgo real, demostrable e identificable, en virtud que con la entrega de la documentación solicitada se hace pública la información que se recopila en un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite; es decir las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación para la acreditación del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

En concordancia con lo anterior, proporcionar la averiguación previa en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por esta autoridad competente, o bien provocar la alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación o poner en riesgo la seguridad o incluso la vida de cualquier persona que se encuentre inmersa en la misma.

II. Perjuicio que supera el interés público, toda vez que, de hacerse públicas las investigaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación, la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, contenidas en la documentación solicitada, se estaría afectando el interés general que protege esta Institución, consistente en la procuración de justicia a favor de la sociedad, en atención de un interés particular.

Es decir, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que la información en comento atiende a la protección del interés jurídico superior de la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría General de la República radica en implementar acciones para prevenir, perseguir y sancionar los delitos.

III. Principio de proporcionalidad, en virtud, de que no es posible proporcionar la información solicitada, ya que al hacerse públicos los elementos que el Ministerio Público Federal pondría a consideración del Juez para determinar la probable responsabilidad o no del indiciado,

podrían alterarse los medios de prueba recopilados, tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado Democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información requerida por el particular vulnera el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés general. En ese sentido, tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad en su totalidad, se debe cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos.

A.3. Folio 0001700292016

Contenido de la Solicitud: *"Por este medio solicito que se me informe si existe o existió alguna denuncia en Sonora y en algún otro Estado en contra de (...) y (...). Precisar los delitos por los que son acusados o fueron procesados, la fecha y si existe alguna resolución del expediente."* (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: AIC, DGCS, FEPADE, SDHPDSC, SJA, SCRPPA, SEIDF y SEIDO.

PGR/CT/ACDO/119/2016: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de confidencialidad, respecto al pronunciamiento Institucional sobre la existencia o inexistencia de alguna denuncia, investigación, averiguación previa y/o carpeta de investigación en contra de las personas referidas en la solicitud, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Toda vez que aseverar la existencia o inexistencia de investigaciones en contra de una persona física identificada o identificable, se encuentra directamente relacionado con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

Máxime, que en caso que nos ocupa, de la búsqueda realizada por la Dirección General de Comunicación Social, no se localizaron boletines, comunicados de prensa, ni informes oficiales de esta Procuraduría General de la República, en donde se precise la existencia de alguna investigación en contra de las personas de su interés.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como parte en el procedimiento penal, a saber:

**"CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO**

Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable".

Como refuerzo de lo anterior, es loable traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se

afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

*"Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)
Décima Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tribunales Colegiados de Circuito
160425 1 de 3
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pág. 4036*

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos".

*"Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309*

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a

inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a extemar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público”.

*"Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74*

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de

la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados”.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé:

“Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos ,se señala:

“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.*

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece:

“Artículo 17.

- 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*
- 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

- I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.*

Concatenado a esto, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

“Artículo 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código”.

A.4. Folio 0001700303816

Contenido de la Solicitud: *"Solicito a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR) una relación de los expedientes vinculados con lavado de dinero de 2000 a 2015, desglosados por: 1) año; 2) nombre acusados; 3) monto por el cual se investigó."* (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: COPLADII, DGCS, SEIDO y OP.

PGR/CT/ACDO/120/2016: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de confidencialidad, invocada por la OP, a través de la UEAF respecto al nombre de los probables responsables, por ser un dato personal, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Toda vez que se encuentra directamente relacionado con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad. -----

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features multiple sets of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings.

2/2

A.5. Folio 0001700304616

Contenido de la Solicitud: "Copia de procesos y/o denuncias de cualquier fecha, presentadas en contra de (...) exdirector centro regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Durango y en Aguascalientes por la presunta comisión del delito de peculado" (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: SDHPDSC, SJA, FEPADE, DGCS, SCRRPA, VG, SEIDF y SEIDO.

PGR/CT/ACDO/121/2016: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de confidencialidad, respecto al pronunciamiento institucional sobre la existencia o inexistencia de alguna denuncia, investigación, averiguación previa y/o carpeta de investigación en contra de la persona referida en la solicitud, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Toda vez que aseverar la existencia o inexistencia de investigaciones en contra de una persona física identificada o identificable, se encuentra directamente relacionado con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

Máxime, que en caso que nos ocupa, de la búsqueda realizada por la Dirección General de Comunicación Social, no se localizaron boletines, comunicados de prensa, ni informes oficiales de esta Procuraduría General de la República, en donde se precise la existencia de alguna investigación en contra de las personas de su interés. -----

[illegible]

2/2

A.6. Folio 0001700305316

Contenido de la Solicitud: *“¿tengo una denuncia en mi contra? a mi persona: (...)” (Sic)*

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: DGCS, FEPADE, SCRPPA, SEIDO, SEIDF y SDHPDSC.

PGR/CT/ACDO/122/2016: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva y confidencialidad, respecto al pronunciamiento institucional sobre la existencia o inexistencia de alguna denuncia, investigación, averiguación previa y/o carpeta de investigación en contra de la persona referida en la solicitud, con fundamento en los artículos 110, fracción VII y 113, fracción I de la LFTAIP, por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

I. Riesgo real, demostrable e identificable, en virtud que emitir pronunciamiento de la información petitionada en sentido afirmativo o negativo, es decir manifestar la existencia o inexistencia de alguna denuncia, investigación o averiguación previa en trámite limitaría la capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos.

En concordancia con lo anterior, proporcionar información en sentido afirmativo o negativo, es decir, manifestar la posible existencia o inexistencia de alguna denuncia, investigación o averiguación previa en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente, ya que bajo ese contexto se puede alertar al inculpado o sus cómplices, o bien provocar la alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación o poner en riesgo la seguridad o incluso la vida de cualquier persona que se encuentre inmersa en la misma.

II. Es pertinente señalar que la reserva del pronunciamiento de esta Institución en sentido afirmativo o negativo de la existencia o inexistencia de alguna denuncia, investigación y/o averiguación previa en contra de la persona referida en su solicitud, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que la información en comento atiende a la protección del interés jurídico superior de la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría General de la República radica en implementar acciones para prevenir los delitos y, por ende, dar cuenta sobre la capacidad para evitar la comisión de hechos relacionados con conductas posiblemente ilícitas, atendiendo así a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.

III. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República en sentido afirmativo o negativo respecto a la información petitionada, no puede traducirse en un medio

restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tiene la característica de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado. -----

[illegible]

A.7. Folio 0001700310416**Contenido de la Solicitud: "Se anexa solicitud" (Sic)**

Archivo adjunto: *"Solicitar a las Subprocuradurías, sus unidades de Investigación, Delegaciones, Fiscalías, Mesas, Agencia de Investigación Criminal, Archivo vigente e histórico, unidades administrativas etc. de esa Institución, e informar al suscrito y por conducto de mi representante legal autorizado en el citado domicilio, cualquier antecedente sobre Número de Averiguación Previa, Actas Circunstanciadas, Carpetas de Investigación y relativos asimilables y sus respectivos datos de identificación, antecedentes, causas y demás intervención o actos derivados de las mismas que tengan como parte, mencionados o indiciados a los (...) ..." (Sic)*

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: SJA, SCRPPA, SEIDF, SEIDO, DGCS, SDHPDSC, VG, FEPADE y OM.

PGR/CT/ACDO/123/2016: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva y confidencialidad, respecto al pronunciamiento institucional sobre la existencia o inexistencia de alguna denuncia, investigación, averiguación previa y/o carpeta de investigación en contra de la persona referida en la solicitud, con fundamento en los artículos 110, fracción VII y 113, fracción I de la LFTAIP, por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

I. Riesgo real demostrable e identificables: proporcionar información en sentido afirmativo o negativo, es decir, manifestar la posible existencia o inexistencia de alguna denuncia, investigación o averiguación previa en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente, ya que bajo ese contexto se puede alertar al inculpado o sus cómplices, o bien provocar la alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación o poner en riesgo la seguridad o incluso la vida de cualquier persona que se encuentre inmersa en la misma.

II. Perjuicio que supera el interés público: la clasificación hecha por esta Institución en sentido afirmativo o negativo de la existencia o inexistencia de alguna denuncia, investigación y/o averiguación previa en contra de la persona referida en su solicitud, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que la información en comento atiende a la protección del interés jurídico superior de la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría General de la República radica en implementar acciones para prevenir los delitos y, por ende, dar cuenta sobre la capacidad para evitar la comisión de hechos relacionados con conductas posiblemente ilícitas, atendiendo así a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.

III. Principio de proporcionalidad: no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen la característica de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

De lo anterior, se deriva que, en principio toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; no obstante lo anterior, el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación, en el cual resultará clasificada la misma, siempre que exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público por conocer la información de que se trate. -----

[illegible]

B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de los documentos requeridos:**B.1. Folio 0001700286716**

Contenido de la Solicitud: "Solicito la información relativa a las adquisición de AGUA POTABLE EMBOTELLADA O ENVASADA EN VARIAS PRESENTACIONES (botellas o envases plásticos, tetra-pack o de vidrio) para las partidas específicas 22101, 22102, 22103, 22104, 22105 y 22106, así como para otras partidas cuando así aplique: 1. Número de botellas o envases de agua con 200 ml o menos 2. Número de botellas o envases de agua con entre 201 ml y 400 ml 3. Número de botellas o envases de agua con entre 401 ml y 800 ml 4. Número de botellas o envases de agua con entre 801 ml y 1000 ml 5. Número de botellas o envases de agua con entre 1001 ml y 2000 ml 6. Número de botellas o envases de agua con entre 2001 ml y 4000 ml 7. Número de botellas o envases de agua con entre 4,001 ml y 10,000 ml 8. Número de botellas o envases de agua con más de 10,000 ml (no garrafones) 9. Número de garrafones retornables de agua con 20 litros o más 10. Monto erogación antes de impuestos por adquisición de botellas o envases de agua con 200 ml o menos 11. Monto erogación antes de impuestos por adquisición de botellas o envases de agua con entre 201 ml y 400 ml 12. Monto erogación antes de impuestos por adquisición de botellas o envases de agua con entre 401 ml y 800 ml 13. Monto erogación antes de impuestos por adquisición de botellas o envases de agua con entre 801 ml y 1000 ml 14. Monto erogación antes de impuestos por adquisición de botellas o envases de agua con entre 1001 ml y 2000 ml 15. Monto erogación antes de impuestos por adquisición de botellas o envases de agua con entre 2001 ml y 4000 ml 16. Monto erogación antes de impuestos por adquisición de botellas o envases de agua con entre 4,001 ml y 10,000 ml 17. Monto erogación antes de impuestos por adquisición de botellas o envases de agua con más de 10,000 ml (no garrafones) 18. Monto erogación antes de impuestos por adquisición de garrafones retornables de agua con 20 litros o más Asimismo, solicito la siguiente información para los tres tipos de adquisición de botellas de agua (licitaciones abiertas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas): 19. MONTO total de contratos asignados para la adquisición EXCLUSIVA de botellas o envases de agua (no garrafones retornables) 20. MONTO total de contratos asignados que INCLUYERAN pero no fueran exclusivos para la adquisición de botellas o envases de agua (no garrafones retornables) 21. MONTO total de contratos asignados para la adquisición EXCLUSIVA de GARRAFONES retornables de agua 22. MONTO total de contratos asignados que INCLUYERAN pero no fueran exclusivos para la adquisición de GARRAFONES de agua v_SIRA_6octubre2016 Solicitudes transparencia agua embotellada 2 23. NÚMERO total de contratos asignados para la adquisición EXCLUSIVA de botellas o envases de agua (no garrafones retornables) 24. NÚMERO total de contratos asignados que INCLUYERAN pero no fueran exclusivos para la adquisición de botellas o envases de agua (no garrafones retornables) 25. NÚMERO total de contratos asignados para la adquisición EXCLUSIVA de GARRAFONES retornables de agua 26. NÚMERO total de contratos asignados que INCLUYERAN pero no fueran exclusivos para la adquisición de GARRAFONES de agua" (Sic)

Otros datos para facilitar su localización: "Finalmente, para las donaciones que sean exclusivas de agua embotellada o envasada o las donaciones que incluyan agua embotellada o envasada, solicito: 27. NÚMERO total de donaciones EXCLUSIVAMENTE de botellas o

envases de agua o para la adquisición EXCLUSIVA de botellas o envases de agua (no garrafones retornables) 28. NÚMERO total de donaciones que INCLUYERAN pero no fueran exclusivas de botellas o envases de agua (no garrafones retornables) 29. NÚMERO total de donaciones de GARRAFONES de agua o para la adquisición EXCLUSIVA de garrafones retornables de agua 30. NÚMERO total de donaciones que INCLUYERAN GARRAFONES pero no fueran exclusivos de para la adquisición o exclusivos de garrafones de agua 31. NÚMERO total de botellas o envases de agua (no garrafones) donados o adquiridos con donaciones cuyo objeto fuera EXCLUSIVO para botellas o envases de agua 32. NÚMERO total de botellas o envases de agua (no garrafones) donados o adquiridos con donaciones que INCLUYERAN pero no fueran objeto exclusivo de la donación 33. NÚMERO total de garrafones de agua donados o adquiridos con donaciones EXCLUSIVAMENTE para GARRAFONES de agua 34. NÚMERO total de garrafones de agua donados o adquiridos con donaciones INCLUIDOS en la donación pero que no fueron objeto exclusivo de la misma Toda la información se solicita es para los ejercicios fiscales 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015, así como para los meses enero a septiembre 2016. Para mayor facilidad en la comprensión de la solicitud se anexa un archivo de Excel con tres distintas pestañas con el formato en el cual se solicita recibir la información. En caso de que envío electrónico por Internet a través de la plataforma no sea posible, favor de remitir archivo electrónico en USB o CD o cualquier otro medio electrónico.” (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: SJAI y OM.

PGR/CT/ACDO/124/2016: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAI, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de confidencialidad invocada por la OM, autorizando la versión pública de los contratos y las hojas de pedido de adquisición, expresiones documentales que brindan respuesta a lo solicitado, en las que se testarán los datos personales del representante de la empresa, tales como son su nombre y firma, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAI. -----



B.2. Folio 0001700292616

Contenido de la Solicitud: "Se anexa solicitud" (Sic)

Archivo adjunto: "...la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos, a cargo del congresista Thomas Peter Lantos, envió una carta firmada por los diputados que integran la Comisión a la PGR, con el fin de que interviniera a favor de quienes sufren intolerancia religiosa en nuestro país...

1.- Me informen por escrito ¿en qué fecha recibió y conoció el contenido de la misma la Procuradora? Si es que existe copia sellada de la misma con acuse de recibo, le agradecería me proporcionaran una copia".

2.- Obtener una copia de la respuesta –si es que ya existe- que la Procuradora Arely Gómez da a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos.

3.- Me informen por escrito ¿qué acciones tomó la Procuradora después de que recibió la misiva y leyó su contenido? Si es que la Procuradora o algún funcionario de PGR turnó la carta a alguna dependencia, o a algún funcionario mexicano, quisiera tener copia de la misma.

3.- Me informen por escrito ¿cuántos casos de intolerancia religiosa han sido denunciados ante la PGR en lo que va de la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto? De existir los expedientes, agradecería me enviaran copia de los mismos.

4.- Me informen por escrito ¿cuántos casos de intolerancia religiosa tienen registrados en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a cargo de Eber Omar Betanzos Torres.

5.- Me informen por escrito qué acciones preventivas, correctivas y legales lleva a cabo la Procuraduría General de la República para evitar y atender los casos de intolerancia religiosa donde se violan los derechos humanos en el país." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: OP, COPLADII, CAIA, SEIDF, SDHPDSC, DGCS y DGALEYN.

PGR/CT/ACDO/125/2016: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de confidencialidad invocada por la CAIA, autorizando la versión pública de la copia simple de la carta dirigida a la entonces C. Procuradora General de la República y del oficio SJAI/CAI/1004/2016, en los que se testarán los nombres y firmas de funcionarios públicos de los Estados Unidos de América, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP. -

B.3. Folio 0001700303916

Contenido de la Solicitud: *"solicito la version publica de la averiguacion previa presentada contra el exgobernador de coahuila, humberto moreira, por probables delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilicito, fraude y peculado. folio de solicitud: 0001700234016" (Sic)*

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: SCRPPA, SEIDO, FEPADE y SEIDF.

PGR/CT/ACDO/126/2016: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva y confidencialidad invocada por la SEIDF, conforme a lo siguiente:

- Se clasifica como información reservada el expediente de la averiguación previa solicitado, con fundamento en el artículo 110, fracción XII de LFTAIP, en relación con el artículo 16 del CFPP, por un periodo de 5 años, por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

I. Riesgo real, demostrable e identificable, en virtud que con la entrega de la documentación solicitada se hace pública la información que se recopila en un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite; es decir las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación para la acreditación del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

En concordancia con lo anterior, proporcionar la averiguación previa en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por esta autoridad competente, o bien provocar la alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación o poner en riesgo la seguridad o incluso la vida de cualquier persona que se encuentre inmersa en la misma.

II. Perjuicio que supera el interés público, toda vez que, de hacerse públicas las investigaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación, la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, contenidas en la documentación solicitada, se estaría afectando el interés general que protege esta Institución, consistente en la procuración de justicia a favor de la sociedad, en atención de un interés particular.

Es decir, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que la información en comento atiende a la protección del interés jurídico superior de la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría General de la República radica en implementar acciones para prevenir, perseguir y sancionar los delitos.

III. Principio de proporcionalidad, en virtud, de que no es posible proporcionar la información solicitada, ya que al hacerse públicos los elementos que el Ministerio Público Federal pondría a consideración del Juez para determinar la probable responsabilidad o no del indiciado, podrían alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito, o incluso, sustraerse de la acción de la justicia. Tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado Democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información requerida por el particular vulnera el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés general. En ese sentido, tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad en su totalidad, se debe cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos.

- Se clasifica como información reservada y confidencialidad los datos del personal sustantivo y los datos personales tales como los nombres, domicilios, teléfonos, y cualquier otro que haga identificable al o los inculpado(s), testigo(s), y/o de cualquier persona que haya intervenido durante la investigación, inmersos en el No Ejercicio de la Acción Penal, lo anterior con fundamento en los artículos 110, fracción V y 113, fracción I de la LFTAIP, respectivamente, por lo que se autoriza la versión pública del citado documento, por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

I. Riesgo real, demostrable e identificable: Difundir información relativa al personal operativo que se desempeña como servidor público, pone en riesgo la vida, la función y actuación de dichos funcionarios (y sus familiares) al hacerlos identificables, tomando en consideración el tipo de funciones que realizan para investigar y acreditar diversos ilícitos, así como las actuaciones de las personas y organizaciones dedicadas a la delincuencia.

II. Perjuicio que supera el interés público: Al permitir que se identifique al personal operativo que se desempeña como servidor público con funciones de investigación, se pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad física, aunado a que el hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con dicho personal, hecho que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública vulnerando el interés general, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés público, por lo que tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad, se debe cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos a cargo del personal con funciones de investigación.

III. Principio de proporcionalidad: El reservar información relativa a datos del personal sustantivo de esta Institución no es un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que se realizará versión pública del No Ejercicio de la Acción Penal reservando los nombres del personal que realiza funciones operativas y de investigación, ya que de entregar dicha información los haría identificables poniendo en inminente riesgo la vida y la integridad tanto de ellos como de sus familiares. -----

B.4. Folio 0001700304016

Contenido de la Solicitud: "LA VERSION PUBLICA DE LA RESOLUCION DEL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL DERIVADA DE LA AVERIGUACION PREVIA AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-II/267/2012 CONTRA HUMBERTO MOREIRA FOLIO: 0001700199216" (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: SEIDF.

PGR/CT/ACDO/127/2016: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva y confidencialidad invocada por la SEIDF, autorizando la versión pública del No Ejercicio de la Acción Penal solicitado, en el que se testarán los datos del personal sustantivo y los datos personales tales como los nombres, domicilios, teléfonos, y cualquier otro que haga identificable al o los inculpado(s), testigo(s), y/o de cualquier persona que haya intervenido durante la investigación, con fundamento en los artículos 110, fracción V y 113, fracción I de la LFTAIP, respectivamente, por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

I. Riesgo real, demostrable e identificable: Difundir información relativa al personal operativo que se desempeña como servidor público, pone en riesgo la vida, la función y actuación de dichos funcionarios (y sus familiares) al hacerlos identificables, tomando en consideración el tipo de funciones que realizan para investigar y acreditar diversos ilícitos, así como las actuaciones de las personas y organizaciones dedicadas a la delincuencia.

II. Perjuicio que supera el interés público: Al permitir que se identifique al personal operativo que se desempeña como servidor público con funciones de investigación, se pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad física, aunado a que el hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con dicho personal, hecho que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública vulnerando el interés general, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés público, por lo que tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad, se debe cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos a cargo del personal con funciones de investigación.

III. Principio de proporcionalidad: El reservar información relativa a datos del personal sustantivo de esta Institución no es un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que se realizará versión pública del No Ejercicio de la Acción Penal reservando los nombres del personal que realiza funciones operativas y de investigación, ya que de entregar dicha información los haría identificables poniendo en inminente riesgo la vida y la integridad tanto de ellos como de sus familiares.

B.5. Folio 0001700310616

Contenido de la Solicitud: *"Requiero copia simple de las declaraciones minístralas dentro de la Averiguación previa AP PGR/FEMOSPP/02/2002 de los siguientes personajes: Luis Echeverría Álvarez, Luis Gutiérrez Oropeza, Miguel Nazar Haro ,Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, Alonso Aguirre Ramos" (Sic)*

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: SEIDF y DGCS.

PGR/CT/ACDO/128/2016: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **modifica** la clasificación de confidencialidad invocada por la SEIDF, autorizando la versión pública de los documentos solicitados, a efecto de que se clasifique como información reservada y confidencial los datos del personal sustantivo y los datos personales tales como nombre, edad, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, ocupación, trayectoria laboral, nacionalidad, Clave Única de Registro Poblacional (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), números telefónicos, religión, instrucción escolar, en su caso, rasgos fisonómicos y todos aquellos tendientes a su identificación, lo anterior con fundamento en los artículos 110, fracción V y 113, fracción I de la LFTAIP, respectivamente, por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

I. Riesgo real, demostrable e identificable: Difundir la información relativa al personal sustantivo que se desempeña o desempeñó como servidor público, se proporcionarían elementos que lo hacen identificable, poniendo en riesgo su vida, las funciones y actuaciones de seguridad que realiza y la de sus familiares por estar vinculados con el servidor público, tomando en consideración que las actividades que realizan son meramente de investigación a acreditación del cuerpo del delito de diversos delitos del orden federal vinculadas con la delincuencia organizada.

II. Perjuicio que supera el interés público: Al permitir que se identifique al personal sustantivo que se desempeña o desempeñó como servidor público con funciones de investigación, se pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad física, aunado a que el hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con dicho servidor público, hecho que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública vulnerando el interés social y general, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalece el interés particular sobre el interés público, por lo que tomando en consideración que esta Institución debe cumplir con la sociedad, con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos a cargo de su personal sustantivo.

III. Principio de proporcionalidad: El reservar información relativa a datos de personal sustantivo de la Institución no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información,

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features approximately 20 horizontal dashed lines spaced evenly across the page, providing a guide for letter height and placement. The lines are light gray and extend from the left margin to the right edge of the paper. There is no text or other markings on the page.

B.6. Folio 0001700316816

Contenido de la Solicitud: "COPIA DE MI EXPEDIENTE LABORAL A NOMBRE DE (...) TRABAJO EN PGR DESDE EL 2010 HASTA EL 2014." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: OM.

PGR/CT/ACDO/129/2016: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **modifica** la clasificación de reserva invocada por la OM, autorizando la versión pública de la información solicitada conforme a lo siguiente:

- Se clasifique como información confidencial el RFC, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, por tratarse de un dato personal.
- Se clasifica como información reservada los nombres del personal sustantivo, con fundamento únicamente en la fracción V del artículo 110 de la LFTAIP, por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

I. Riesgo real, demostrable e identificable: Al difundir la información relativa a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, se proporcionarían elementos que los harían identificables, localizables y poniendo en riesgo su vida, las funciones y actuaciones en materia de seguridad que realizan y la de sus familiares por estar vinculados con los servidores públicos, tomando en consideración que realiza funciones sustantivas.

II. Perjuicio que supera el interés público: Al permitir que se identifiquen por nombre a los servidores públicos que realizan actividades operativas, los cuales como ha quedado manifestado realizan funciones sustantivas de persecución de delitos federales, con lo cual se pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad física, de tal modo que dar a conocer sus datos personales se traduciría en el hecho de un detrimento al combate de la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública vulnerando el interés social y general; ya que para el caso que nos ocupa, el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante, dejando de lado el interés público que representa salvaguardar la integridad física y disminuyendo cualquier riesgo de fuga de información, que en caso de realizarse, se vería afectado el interés público de la investigación de los delitos.

III. Principio de proporcionalidad: El reservar la información relativa a los nombres de los servidores públicos; no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la salud y la seguridad como bien jurídico tutelado de los funcionarios con actividades operativas dentro de esta Procuraduría General de la República. Lo anterior, en virtud de que se proporciona versión pública del expediente solicitado.

C. Respuestas a solicitudes de información en las que se analiza la incompetencia de la Procuraduría General de la República respecto de los datos requeridos:

C.1. Folio 0001700303516

Contenido de la Solicitud: *"cuantas denuncias han recibido de esta pagina web <http://iptvlatino.com.mx/> que vende un servicio y no lo da y que esta a nombre de (...)" (Sic)*

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: SCRPPA, DGCS, FEPADE, VG, SEIDO, COPLADII, SEIDF y SDHPDSC.

PGR/CT/ACDO/130/2016: En el marco de lo dispuesto en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la incompetencia respecto al contenido de información en dónde refiere: *"cuántas denuncias han recibido de esta página web <http://iptvlatino.com.mx/> que vende un servicio y no lo da"*, en virtud de que la conducta a la que se hace referencia en la solicitud no resulta de la competencia de esta Procuraduría General de la República, por no corresponder a un hecho posiblemente constitutivo de un hecho delictivo del fuero federal, si no por el contrario se basa en el incumplimiento del ofrecimiento de un servicio, por lo que se deberá orientar al particular a efecto de que presente su solicitud de acceso a la información a las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las Entidades Federativas, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), las cuales pudieran contar con información al respecto.

Asimismo, del análisis que realizan los integrantes del Comité, no pasa desapercibido que en el contenido de la solicitud se hace referencia a una persona física por lo que, en el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de confidencialidad, respecto al pronunciamiento institucional sobre la existencia o inexistencia de alguna denuncia, investigación, averiguación previa y/o carpeta de investigación en contra de la persona referida en la solicitud, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Toda vez que aseverar la existencia o inexistencia de investigaciones en contra de una persona física identificada o identificable, se encuentra directamente relacionado con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

Máxime, que en caso que nos ocupa, de la búsqueda realizada por la Dirección General de Comunicación Social, no se localizaron boletines, comunicados de prensa, ni informes oficiales de esta Procuraduría General de la República, en donde se precise la existencia de alguna investigación en contra de la persona de su interés. -----

C.2. Folio 0001700309616

Contenido de la Solicitud: *"Solicito la versión pública del expediente completo de la PGR sobre el dinero incautado y devuelto al gobierno de Veracruz en 2012".*

<http://www.animalpolitico.com/2012/01/iberan-a-colaboradores-de-duarte-tras-acreditar-destino-de-los-25-mdp/>

Solicito el expediente completo donde se documente la detención de Miguel Morales Robles y Saíd Sandoval Zepeda” (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: SEIDF, DGCS, SEIDO y SCRPPA.

PGR/CT/ACDO/131/2016: En el marco de lo dispuesto en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la incompetencia invocada por la SCRPPA, de la información solicitada. Por lo que se deberá orientar al particular a efecto de que presente su solicitud de acceso a la información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, ya que esta Institución declinó competencia hacia el orden común. -



C.3. Folio 0001700309716

Contenido de la Solicitud: *"Solicito la versión pública del expediente donde se acredite la detención de Miguel Morales Robles y Saíd Sandoval Zepeda, colaboradores del gobierno de Veracruz, tras la incautación de dinero en efectivo en 2012 en un aeropuerto del Estado de México.*

<http://www.animalpolitico.com/2012/01/iberan-a-colaboradores-de-duarte-tras-acreditar-destino-de-los-25-mdp/>

Solicito la versión pública del expediente donde se acredite la detención de Miguel Morales Robles y Saíd Sandoval Zepeda" (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: SEIDF, DGCS, SEIDO y SCRPPA.

PGR/CT/ACDO/132/2016: En el marco de lo dispuesto en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la incompetencia invocada por la SCRPPA, de la información solicitada. Por lo que se deberá orientar al particular a efecto de que presente su solicitud de acceso a la información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, ya que esta Institución declinó competencia hacia el orden común. -

C.4. Folio 0001700310116

Contenido de la Solicitud: *“¿cuántas denuncias existen de desaparición forzada en Puebla desde el 2005 al 2010 y que lugar se querellaron? ¿Cuántas llegaron a sentencia? toda la información de la Agencia del Ministerio Público Especializada en los delitos de Tortura y Desaparición Forzada de Personas (Publicada en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre del año 2015) organigrama, estructura normativa, ley, reglamento interno, Titular.” (Sic)*

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: SEIDO, COPLADII, DGCS, SEIDF, SDHPDSC y SCRPPA.

PGR/CT/ACDO/133/2016: En el marco de lo dispuesto en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la incompetencia invocada por la SCRPPA, en virtud de que el contenido de información en el que hace mención a: *“toda la información de la Agencia del Ministerio Público Especializada en los delitos de Tortura y Desaparición Forzada de Personas (Publicada en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre del año 2015) organigrama, estructura normativa, ley, reglamento interno, Titular.” (Sic)* corresponde a una unidad administrativa que se encuentra adscrita a la Procuraduría Estatal, razón por la cual se deberá orientar al particular a efecto de que presente su solicitud de acceso a la información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. -----



C.5. Folio 0001700315016

Contenido de la Solicitud: *"Solicito la versión pública del expediente completo AP/PGR/MEX/TOL/VI/310/2012 y sus respectivos anexos."* (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: SCRPPA.

Al respecto la SCRPPA, a través de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, manifestó que no localizó la averiguación previa número AP/PGR/MEX/TOL-VI/310/2012, únicamente localizó el registro de la diversa AP/PGR/MEX/TOL-VI/310A/2012, iniciada el 28 de enero de 2012 por la Delegación de esta Procuraduría en el Estado de México, siendo remitida por incompetencia a la citada Dirección General de Control de Averiguaciones Previas el 31 de enero de 2012, por lo que se dio inicio a la diversa indagatoria AP/PGR/DGCAP/ZCB-IV/15A/2012, la cual fue remitida por incompetencia a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (hoy Fiscalía General del Estado de Veracruz).

PGR/CT/ACDO/134/2016: En el marco de lo dispuesto en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la incompetencia invocada por la SCRPPA, respecto a la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZCB-IV/15A/2012. Por lo que se deberá orientar al particular a efecto de que presente su solicitud de acceso a la información a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ya que esta Institución declinó competencia hacia el orden común.

C.6. Folio 0001700315116

Contenido de la Solicitud: *"Solicito la versión pública del expediente AP/PGR/MEX/TOL/VI/310a/2012."* (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: SCRPPA.

PGR/CT/ACDO/135/2016: En el marco de lo dispuesto en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la incompetencia invocada por la SCRPPA, respecto a la averiguación previa solicitada. Por lo que se deberá orientar al particular a efecto de que presente su solicitud de acceso a la información a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ya que esta Institución declinó competencia hacia el orden común. -

D. Solicitudes de acceso a la información en las que se determina la ampliación de término:

PGR/CT/ACDO/136/2016: Los miembros del Comité de Transparencia determinaron autorizar la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LFTAIP. Lo anterior, en virtud de que las unidades administrativas responsables de dar respuesta a las mismas se encuentran realizando una búsqueda exhaustiva en sus archivos, para estar en posibilidad de determinar, en cada caso la publicidad, clasificación o inexistencia de la respuesta a los siguientes folios:

- D.1. Folio 0001700283316
- D.2. Folio 0001700299516
- D.3. Folio 0001700303616
- D.4. Folio 0001700304716
- D.5. Folio 0001700304816
- D.6. Folio 0001700306516
- D.7. Folio 0001700306816
- D.8. Folio 0001700307216
- D.9. Folio 0001700307516
- D.10. Folio 0001700308016
- D.11. Folio 0001700308216
- D.12. Folio 0001700308316
- D.13. Folio 0001700308616
- D.14. Folio 0001700309016
- D.15. Folio 0001700309216
- D.16. Folio 0001700309416
- D.17. Folio 0001700310216
- D.18. Folio 0001700310316
- D.19. Folio 0001700310516
- D.20. Folio 0001700310816
- D.21. Folio 0001700311016
- D.22. Folio 0001700311116
- D.23. Folio 1700500001316

Sin embargo se exhorta a los asistentes a que, en aquellos requerimientos en los que dentro del procedimiento de acceso, se encuentre pendiente por concluir el proceso de verificación de la existencia de información en sus archivos, se entregue a la brevedad los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y forma.-----

E. Respuestas a solicitudes de información en las que se analizarán los cumplimientos a las resoluciones del INAI.

- E.1. Folio 0001700188716 — RRA 242416
- E.2. Folio 0001700222016 — RRA 291316



**COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Las resoluciones adoptadas por unanimidad de los miembros del Comité se encuentran al final de la presente acta. -----

F. Procedimiento de acceso a la información en la AIC.

De conformidad con el artículo 137 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental ha trabajado, para dar trámite interno a las solicitudes de información, con un enlace en materia de transparencia, por lo que atendiendo a lo solicitado por la AIC, se acuerda que a partir de hoy las derivaciones de asuntos en materia de transparencia competencia de dicha Agencia, serán enviadas directamente al enlace de cada unidad administrativa, es decir al de la Policía Federal Ministerial, de la Coordinación General de Servicios Periciales y del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; independientemente de aquellas que sea competencia directa de la AIC atender, a través de su propio enlace de transparencia. -----

Dichos términos fueron aprobados por los integrantes del Comité, por unanimidad. -----

G. Asuntos Generales.

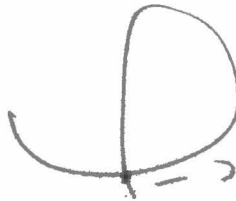
G.1. Solicitudes de acceso a la información relacionadas con carpetas de investigación.

La Presidenta del Comité de Transparencia hace del conocimiento el oficio PGR/COPLADII/DGPPE/439/2016, del Director General y Secretario Técnico del Comité para la Validación Revisión y Comparación, respecto a la información contenida en el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE), el cual es el canal único para el flujo de la información estadística relacionada con la investigación y el seguimiento de los procesos penales de la Procuraduría General de la República, de conformidad con el Acuerdo A/018/12 y sus reformas establecidas en el Acuerdo A/084/15, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre de 2015, en el que se señala que la atención de las solicitudes en materia de acceso a la información pública que presentan los particulares a través del portal de transparencia, se han desahogado con lentitud, debido a que la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos (DGPP) carece de la información específica que en muchas de esas solicitudes requieren, por lo que se solicita a la UTAG, y al Comité apoyo, con la finalidad de que las solicitudes de acceso a la información en materia de transparencia, sean canalizadas también para su atención a las unidades administrativas que tienen facultades, competencias o funciones en materia de investigación de los delitos y seguimiento de los procesos penales ante las instancias judiciales y que son las unidades administrativas generadoras y administradoras de la información relacionada con las carpetas de investigación.

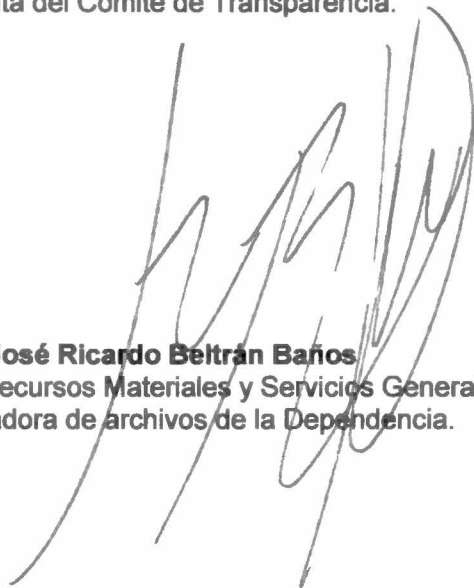
Por lo anterior se insta a los enlaces en materia de transparencia, a continuar atendiendo las solicitudes de acceso a la información relacionadas con carpetas de investigación, aun cuando la información solicitada sea estadística, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -----

Siendo las 14:20 horas del mismo día, se dio por terminada la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del año 2016 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

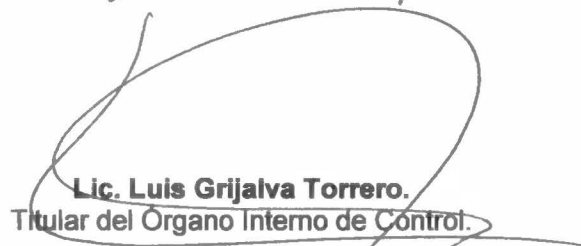
INTEGRANTES.



Lcda. Tanya Marlenne Magallanes López
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



Lic. José Ricardo Beltrán Baños
Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, responsable del
área coordinadora de archivos de la Dependencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.
Titular del Órgano Interno de Control.

RESOLUCIÓN

E. Análisis a cumplimiento de las resoluciones del INAI.

E.1 Folio 0001700188716 — RRA 2424/16

Contenido de la Solicitud: "Buenas tardes, soy periodista de Univision y solicito, para fines informativos, conocer los siguientes datos y obtener las siguientes copias de documentos acerca del ciudadano Miguel Angel Segoviano Bervera, sobre el cual la PGR dicto una orden de aprehension, expedida el 7 de mayo de 1993. Solicito 1. Conocer si dicho ciudadano fue detenido en Mexico en algun momento entre el 1 de enero de 1990 y el 12 de julio de 2016, fecha de esta solicitud. Si fue detenido favor de informar para cada detención a. Que autoridad lo detuvo b. Si estuvo internado en algun centro de readaptacion estatal o federal e indicar en cada caso, en cuales c. En cada caso, de que delitos se le acusaba d. En cada caso, como logro salir en libertad, si fue mediante el cumplimiento de una condena, el pago de una fianza, etc. e. Si alguna de estas detenciones fue seguida de un proceso de extradicion. En este caso, favor de informar fecha y lugar de la extradicion. 2. Favor de indicar si existe en los archivos de la PGR algun registro documental, ya sea un reporte, informe, ficha informativa, o cualquier nombre tecnico con el que se le conozca internamente al documento que contenga dicha informacion, que indique si el ciudadano motivo de mi peticion fue detenido en algun otro país, diferente a Mexico, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1990 y el 12 de julio de 2016. De existir dichos documentos en los archivos de la PGR, favor de entregar una copia simple en version publica de todos y cada uno de los documentos en poder de la PGR que respondan a este numeral. 3. Favor de indicar si existe en los archivos de la PGR algun registro documental, ya sea un reporte, informe, ficha informativa, o cualquier nombre tecnico con el que se le conozca internamente al documento que contenga dicha informacion, que indique si el ciudadano motivo de mi peticion fue solicitado en extradicion por Mexico en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1990 y el 12 de julio de 2016. De existir dichos documentos en los archivos de la PGR, favor de entregar una copia simple en version publica de todos y cada uno de los documentos en poder de la PGR que respondan a este numeral. Conozco la secrecia que ampara a mucha de la informacion documental contenida en los documentos bajo el poder de la PGR. Para esta peticion solicito que se considere una exhaustiva busqueda del material en todas las dependencias al interior de la PGR que pudieran contener dicho material y no unicamente en los archivos de las averiguaciones previas. Si alguna parte de la informacion que da respuesta a mi solicitud contiene datos personales, es considerada como reservada o confidencial, favor de entregar una version publica de dicha informacion, que contenga los datos que responden a mi solicitud. En caso de que alguna parte de la informacion que solicito no me sea entregada, favor de justificar cuales son las causas que llevan a la negativa de la entrega de la informacion. Muchas gracias." (Sic)

Al respecto el solicitante, se inconformó con la respuesta otorgada por esta PGR, interponiendo recurso de revisión ante el INAI.

Con fecha 17 de noviembre de 2016 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) notificó la resolución correspondiente al recurso de revisión RRA 2424/16, a través de la cual resolvió MODIFICAR la respuesta, de conformidad con la fracción III del artículo 56 de la Ley en la materia, y se instruyó a lo siguiente:

"... este Instituto considera MODIFICAR la respuesta de la Procuraduría General de la República y se instruye a efecto de que su Comité de Transparencia emita una resolución en la que clasifique como confidencial el pronunciamiento relacionado con la existencia o no de algún documento o información, en sus archivos, relativo a:

a. Si un ciudadano fue detenido en México en el periodo del uno de enero de mil novecientos noventa al doce de julio de dos mil dieciséis.

b. De registro documental que indique si el ciudadano fue detenido en algún otro país, diferente a México, en el periodo entre el del uno de enero de mil novecientos noventa al doce de julio de dos mil dieciséis, y

c. De registro documental que dé cuenta si el ciudadano de mérito fue solicitado en extradición por México, del uno de enero de mil novecientos noventa al doce de julio de dos mil dieciséis.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinación que deberá hacer del conocimiento del particular" (Sic)

RESOLUCIÓN PGR/CT/021/2016: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, y en estricto cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 2424/16, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de confidencialidad, con fundamento en el artículos 113, fracción I de la LFTAIP, respecto la siguiente información solicitada:

- Si el ciudadano (...) fue detenido en México en el periodo del uno de enero de mil novecientos noventa al doce de julio de dos mil dieciséis.
- Del registro documental que indique si el ciudadano (...) fue detenido en algún otro país, diferente a México, en el periodo entre el del uno de enero de mil novecientos noventa al doce de julio de dos mil dieciséis, y
- Del registro documental que dé cuenta si el ciudadano de mérito fue solicitado en extradición por México, del uno de enero de mil novecientos noventa al doce de julio de dos mil dieciséis.

Toda vez que dar a conocer si existe o no una averiguación previa relacionada con una persona moral, podría afectar la imagen de esta, dado que genera una percepción negativa de la persona, al presuponer que se encuentra relacionada con la comisión de delitos, afectando su imagen y buen nombre, ya que vulnera la protección de su intimidad, al generar un *juicio a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad jurisdiccional competente haya determinado su culpabilidad o inocencia.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de una investigación por la comisión de delitos, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia.

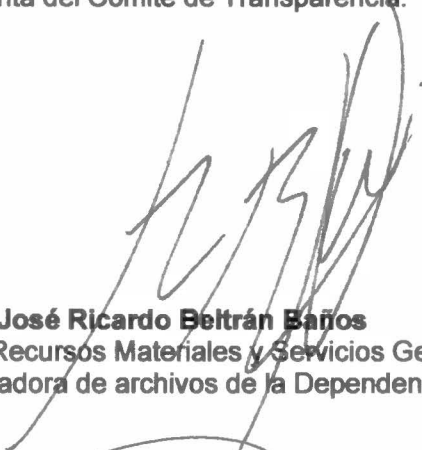
Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental hacer del conocimiento el sentido de la presente resolución al particular por el medio de notificaciones reconocido por el INAI para ello.-----

La presente resolución forma parte del Acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del año 2016 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES.



Lcda. Tanya Marlenne Magallanes López.
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



Lic. José Ricardo Beltrán Baños
Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, responsable del
área coordinadora de archivos de la Dependencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.
Titular del Órgano Interno de Control.

RESOLUCIÓN

E. Análisis a cumplimiento de las resoluciones del INAI.

E.2 Folio 0001700222016 — RRA 2913/16

Contenido de la Solicitud: *"de todo los funcionarios de la PGR a nivel nacional se solicita el nombre cargo y numero de cédula profesional de cada uno" (Sic)*

Al respecto el solicitante, se inconformó con la respuesta otorgada por esta PGR, interponiendo recurso de revisión ante el INAI.

Con fecha 08 de noviembre de 2016 el INAI notificó la resolución correspondiente al recurso de revisión RRA 2913/16, a través de la cual resolvió MODIFICAR la respuesta, de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley en la materia, y se instruyó a lo siguiente:

"...modificar la respuesta de la Procuraduría General de la República, a efecto de instruirle lo siguiente:

Realizar una búsqueda exhaustiva en todas las áreas competentes, de entre las que no podrá omitir a las siguientes:

- *Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.*
- *Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.*
- *Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.*
- *Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.*
- *Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.*
- *Oficialía Mayor.*
- *Visitaduría General.*
- *Agencia de Investigación Criminal.*
- *Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.*

*A efecto, de localizar documental alguna que contenga el nombre, cargo y número de cédula profesional de TODO el personal, del sujeto obligado, **CON EXCEPCIÓN, únicamente de aquél cuya área de adscripción sea alguna de las Unidades Especializadas en delincuencia organizada o de la Policía Federal Ministerial; o bien, que coadyuve en las funciones encomendadas a estas Unidades, y que lleve a cabo funciones operativas, en los términos de la presente resolución.***

- *Emita por conducto de su Comité de Transparencia, acta debidamente fundada, motivada y formalizada en la cual se confirme la clasificación del personal **cuya área de adscripción sea alguna de las Unidades Especializadas en delincuencia organizada o de la Policía Federal Ministerial; o bien, que coadyuve en las funciones encomendadas a estas Unidades, y que lleve a cabo funciones operativas, en los términos de la presente resolución.***

Ahora bien, de no contar dentro de sus archivos con una documental que colme lo requerido, deberá poner a disposición del hoy recurrente, además de la base de datos con nombre y cargo del personal, versión pública de las cédulas profesionales que obren en sus archivos, del personal cuyo cargo amerite contar con ella.

En este supuesto, de existir personal al que le sea requerida por norma la cédula profesional para ocupar un cargo y no obre en los archivos del sujeto obligado, deberá declarar la inexistencia por conducto de su Comité de Transparencia.

De la misma manera, la Procuraduría General de la República deberá poner a disposición del hoy recurrente, acta emitida por su Comité de Transparencia, en la que se funde y motive las partes testadas en las versiones públicas de las cédulas profesionales que; en su caso ponga a disposición del hoy recurrente.

*Cabe reiterar, que la información que se ponga a disposición del hoy recurrente será **CON EXCEPCIÓN**, de aquel personal cuya área de adscripción sea alguna de las Unidades Especializadas en delincuencia organizada o de la Policía Federal Ministerial; o bien, que coadyuve en las funciones encomendadas a estas Unidades, y que lleve a cabo funciones operativas..” (Sic)*

Por lo anterior, la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental turnó para su atención, la instrucción anteriormente citada a la SCRPPA, SEIDO, SEIDF, FEPADE, OM, VG, AIC, COPLADII y SDHPDSC, las cuales proporcionaron un listado que contiene nombre, cargo y cédula profesional de los servidores públicos adscritos a dichas unidades administrativas. Asimismo, la FEPADE, la VG, la AIC, la SEIDO y la SDHPDSC, manifestaron que la información relacionada con el personal que realiza funciones sustantivas para la Institución, adscrito a dichas áreas, se encuentra clasificada como reservada, en virtud que coadyuvan con las Unidades Especializadas en delincuencia organizada y/o la Policía Federal Ministerial, de conformidad con el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de 5 años, conforme a lo siguiente:

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en relación al nombre, cargo y número de cédula profesional del personal que realiza actividades sustantivas y de investigación, encaminadas a la procuración de justicia y de acuerdo con la excepción establecida en la resolución que se cumplimenta, relativa a que únicamente se considera reservada la información del personal cuya área de adscripción sea alguna de las que coadyuve en las funciones encomendadas a las Unidades Especializadas en delincuencia organizada o de la Policía Federal Ministerial, y que lleve a cabo funciones operativas; en atención a ello se considera que los Agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a dicha Fiscalía Especializada, en términos de la reforma político electoral, constitucional y legal de 10 de febrero y 23 de mayo de 2014, respectivamente, coadyuvan con las funciones que realizan las Unidades de excepción, en los casos relativos al delito de financiamiento ilícito en materia electoral previsto en los artículos 7 fracciones XVIII y XXI, y 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en delitos relacionados con la fiscalización que se lleva a cabo a los partidos políticos, coaliciones, candidatos o precandidatos, en términos de lo previsto en el artículo 14, en relación con el diverso 11 fracción III de la citada legislación penal electoral, o bien, cuando dichos delitos puedan tener conexidad con financiamiento o actos provenientes de la delincuencia organizada.

Así también precisó que a diferencia del Código Penal Federal, que establecía diversos delitos electorales, la actual Ley General en Materia de Delitos Electorales, incorpora los delitos de referencia, esto es, financiamiento ilícito y fiscalización de partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos, razón por la cual los Agentes del Ministerio Público Federal y en atención a la naturaleza de los delitos de referencia, el personal sustantivo de la Fiscalía, colabora y coadyuva con el personal sustantivo de la SEIDO en la persecución e investigación

de los delitos de referencia. Máxime que los mismos, por su naturaleza, pueden tener conexidad con los que conoce dicha Subprocuraduría, esto es, operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculados con delitos de financiamiento ilícito en materia electoral, entre otros. Por lo que de revelar la información solicitada se pondría en riesgo la vida y la integridad de personal sustantivo que actualmente realiza labores tendientes a la investigación y persecución de dichas conductas delictivas.

En virtud de lo anterior, la información relativa al personal sustantivo de esta Unidad Administrativa se encuentra clasificada como reservada, dado que puede poner en riesgo la integridad, la vida y la seguridad del personal que labora, puesto que proporcionarla, puede identificar o hacerlo identificable.

Lo anterior resulta de esta manera en razón de la siguiente prueba de daño:

I. Riesgo real, demostrable e identificable: como ha quedado establecido, la coadyuvancia que esta Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales realiza a través del personal sustantivo, con las Unidades Especializadas en delincuencia organizada o de la Policía Federal Ministerial, relativas al financiamiento ilícito o de fiscalización de los partidos políticos, precandidatos o candidatos, representa un combate directo a la delincuencia organizada, por parte del personal con funciones operativas, lo que significa que de revelarse su identidad al público, la integridad tanto de los servidores públicos como de sus familiares, se encuentre en un riesgo real, ya que al ser identificados, la delincuencia organizada puede llevar conductas tendientes a dañarlos con el ánimo de manipular su actuar, o bien tomar represalias, lo que pondría en riesgo a dicho personal o a las personas cercanas a éste.

II. Superioridad del interés público: es de resaltarse que en el caso concreto, la integridad física y la vida de una persona y de sus familiares como en la especie, del personal sustantivo, en atención a los delitos de los que conoce, y que derivan de conductas como el financiamiento ilícito en materia electoral, coadyuvan permanentemente con SIEDO en la investigación de dichas conductas, razón por la cual dichos bienes resultan de especial prevalencia y protección y por ende, se encuentran por encima del interés público respecto de información en posesión de los sujetos obligados, es decir, no resulta una consecuencia apegada a los principios de los derechos humanos poner en riesgo la vida e integridad de una persona por satisfacer el derecho a la información de otra.

III. Principio de proporcionalidad: al respecto, es de estimarse que resguardar únicamente la información que haga identificable al personal cuya área de adscripción sea alguna de las que coadyuve en las funciones encomendadas a la Unidades Especializadas en delincuencia organizada o de la Policía Federal Ministerial, y que lleve a cabo funciones operativas, resulta la medida y proporcionalidad entre el derecho de acceso a la información y el resguardo de la integridad del personal puntualizado, esto es, la integridad y seguridad del personal sustantivo de la Fiscalía, por los delitos de los que conoce, los cuales están vinculados con indagatorias de las que conoce la SEIDO, acciones que deben primar respecto de la solicitud de la información del particular, puesto que, de lo contrario, se pondrían en riesgo bienes de mayor peso, respecto al resultado que pueda haberse obtenido de conceder al particular, la información solicitada.

La Visitaduría General refirió que la información relativa a su personal sustantivo es reservada debido a que es la responsable de llevar a cabo la integración de las investigaciones relacionadas con actos de corrupción en las que intervienen servidores públicos de la Institución de los cuales se presume se encuentran vinculados con miembros de la delincuencia organizada, respetando la competencia de las Unidades Especializadas que integran la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, por lo que se establecen acciones de coordinación, así como de cooperación con dichas Unidades Especializadas con el objetivo de abatir la impunidad.

Asimismo, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 4, 22, y 24 de la LOPGR, así como 24 y 25, fracción XI de su Reglamento, los elementos de la Policía Federal Ministerial coadyuvan en la investigación de las conductas ilícitas e irregulares que son competencia de esta Unidad Administrativa, bajo la dirección de los Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Visitaduría General, por lo que se presenta la prueba de daño correspondiente:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional: Informar los nombres, cargos y cédula profesional del personal sustantivo adscritos a dicha unidad administrativa, representa un riesgo real toda vez que pueden ser relacionados (as) con algún caso en particular y poner en riesgo la integridad física de dicho personal, respecto a alguna venganza. Asimismo, identificar a los (as) servidores públicos representa un riesgo identificable ya que dar a conocer el nombre del personal sustantivo permite establecer una individualización de los (as) servidores públicos asociados con sus labores sustantivas.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda: Revelar la información solicitada permitiría conocer el nombre del personal sustantivo de la Visitaduría General, lo cual, es perjudicial para garantizar la seguridad pública, pues al conocer las identidades de los (as) servidores públicos vinculados directamente con labores de seguridad, la delincuencia puede obstruir su desempeño en el desarrollo de las investigaciones bajo su responsabilidad. Lo anterior, supone una amenaza en la eficacia de las tareas de persecución e investigación de los delitos competentes de esta unidad administrativa. En este sentido, el riesgo de obstruir la prevención y persecución de las conductas ilícitas resulta mayor al interés público general de conocer dicha información, lo anterior de conformidad con los artículos 108, 109 y 113 de la CPEUM.

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio: La reserva de las identidades del personal sustantivo es acorde con el principio de proporcionalidad estricta, en virtud de que en la medida en que se restringe el derecho a conocer sus nombres, cargos y cédulas profesionales, se satisface el interés general de no obstruir las tareas de persecución de los delitos, y por ende, de la sanción de conductas ilícitas.

Además, dicha reserva constituye el medio menos restrictivo para lograr el fin que se persigue, pues no existe alguna otra acción que satisfaga simultáneamente el interés público de persecución de las conductas ilícitas por un lado, y por otro el derecho al acceso a la información.

La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, indicó que su personal sustantivo se encuentra clasificado como reservado, conforme a lo siguiente:

I. Riesgo real, demostrable o identificable: Difundir la información que solicita el particular, relativa al personal sustantivo adscrito a esta Subprocuraduría, se estaría proporcionando elementos que lo hacen identificable, poniendo en riesgo su vida, las funciones y actuaciones de seguridad que realiza, y la de sus familiares por estar vinculados con dicho personal sustantivo, tomando en consideración que las actividades que realiza son de investigación ministerial para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculcado, por diversos delitos del orden federal.

II. Perjuicio que supera el interés público: Al permitir que se identifique al personal sustantivo que se desempeña como servidora pública o servidor público con funciones de investigación ministerial, se pone en riesgo su vida, seguridad, salud o su integridad física, aunado a que el hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con dicho servidor o servidora pública, hecho que iría en detrimento al combate a la delincuencia, en perjuicio de la seguridad pública vulnerando el interés social y general, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante, es decir, prevalecería el interés particular sobre el interés público, por lo que tomando en consideración que esta Institución debe cumplir con la sociedad con su función sustantiva de investigación y persecución de los delitos federales.

III. Principio de proporcionalidad: El reservar información inherente a datos del personal sustantivo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, como es su nombre, cargo y número de cédula profesional, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, ya que dicha reserva tiene como fin primordial proteger la vida, la salud y la seguridad como bien jurídico tutelado de dicho personal que realiza funciones de investigación ministerial que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en diversas leyes y tratados internacionales.

Finalmente, la **Agencia de Investigación Criminal**, refirió que tratándose de la **Policía Federal Ministerial**, la información petitionada tiene el carácter de reservada, por lo que emitió la siguiente prueba de daño:

I. La divulgación de la información solicitada, permitiría la identificación y localización de los servidores públicos, propiciando la materialización de graves riesgos para su vida, seguridad y salud, así como la de sus familiares, toda vez que los haría susceptibles de posibles represalias o ataques por parte de miembros de la delincuencia organizada, mediante acciones de violencia física y/o moral, vulnerando así el desempeño de sus funciones dentro de la Policía Federal Ministerial.

II. Dar a conocer la información requerida, pone en riesgo la vida, seguridad y salud de los servidores públicos, así como la de sus familiares, materializándose acciones en su contra, que perjudiquen las labores inherentes a su cargo dentro de la Policía federal Ministerial,

Unidad Administrativa cuya función principal consiste en auxiliar al Ministerio Público de la Federación en la investigación y persecución de delitos.

III. El reservar la información solicitada, no solo salvaguarda las funciones que realizan los servidores públicos dentro de la Policía Federal Ministerial, sino también se protege su identificación y localización para no poner en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus familiares.

Asimismo, por lo que respecta a la información relacionada con el nombre, cargo y cédula profesional de los peritos adscritos a la **Coordinación General de Servicios Periciales**, comunicó que la misma tiene el carácter de reservada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de la materia, en relación con el numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por un periodo de cinco años.

En ese sentido y de conformidad con la normatividad aplicable en materia de transparencia, emitió la siguiente prueba de daño:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional. Si bien es cierto, el nombre de los servidores públicos es considerada información pública, también lo es que la propia Ley establece una serie de hipótesis restrictivas del derecho de acceso a la información, una de ellas es cuando su divulgación pueda poner en riesgo la vida y la seguridad de una persona. En este caso, al tratarse de una solicitud de información en la que se requiere información de servidores públicos, el darla a conocer, los pondría en un estado vulnerable; ello, en atención a que los peritos, al ser los auxiliares directos del Ministerio Público de la federación en la investigación de delitos, los coloca en un nivel de riesgo frente a las personas que tienen interés en los asuntos en los que intervienen.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general que se difunda. El derecho de acceso a la información no es un derecho absoluto, ya que las mismas leyes que rigen esta materia lo limitan cuando su ejercicio pueda poner en riesgo o causar un daño a un tercero.

En tal sentido, se está frente a una ponderación de derechos, por un lado, el derecho que tiene toda persona a conocer información respecto al quehacer del Estado, en este caso, de procuración de justicia, específicamente en el ámbito pericial; y por el otro lado, los derechos que tienen toda persona a la vida y a la seguridad, los cuales no deben restringirse por el hecho de ser servidores públicos; por el contrario se debe salvaguardar la integridad de las personas que por el ejercicio de su función se encuentran en un estado de mayor riesgo, como son los servidores públicos encargados de la investigación de delitos y sus auxiliares directos como son los peritos.

De lo anterior, se advierte que existe un mayor perjuicio si se da a conocer información relacionada con un servidor público, que por sus funciones forma parte del estado de fuerza de la Procuraduría General de la República, que el interés de que la misma se difunda.

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se define a la proporcionalidad como el equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población; de ello, es preciso manifestar que el revelar información referente a los servidores públicos que realizan funciones sustantivas en investigación de delitos como es el caso de los peritos, se causa una mayor afectación, ya que derivado de la naturaleza de sus funciones puede ponerse en riesgo su integridad física e incluso su vida, ya que los integrantes de la delincuencia pueden identificarlos a través una asociaciones de datos que los lleven a su identificación, lo cual se insiste, representará un riesgo para la efectividad de su trabajo así como en su persona.

Por ello, el no proporcionar la información solicitada referente a los servidores públicos que forman parte del personal de esta unidad administrativa, al que se hace referencia implica una menor restricción, que el proporcionarla para satisfacer el derecho de acceso a la información y que ello implique dejar en estado de vulnerabilidad a los peritos.

RESOLUCIÓN PGR/C1/022/2016: Por lo anteriormente expuesto, el Comité de Transparencia por unanimidad, y en estricto cumplimiento a la resolución RRA 2913/16, determina **confirmar** la clasificación de reserva invocada por la FEPADE, la VG, la AIC, y la SDHPDSC, con fundamento en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de 5 años.

En ese sentido, se instruye a la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental a hacer de conocimiento el sentido de la presente resolución al particular por el medio de notificaciones reconocido por el INAI para ello. -----

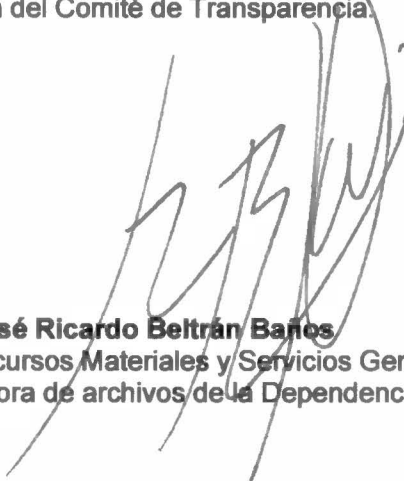
La presente resolución forma parte del Acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del año 2016 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES.



Lcda. Tanya Marianne Magallanes López.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



Lic. José Ricardo Beltrán Baños

Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, responsable del
área coordinadora de archivos de la Dependencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control.